

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
Medellín, quince (15) de abril de dos mil quince (2015)**

RADICADO:	05001 33 33 020 2015-00219 00
TRAMITE	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
SOLICITANTE	GUILLERMO ALFONSO ROSAS
SOLICITADO	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL -CASUR-
TEMA:	RELIQUIDACIÓN Y REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO
DECISIÓN	APRUEBA CONCILIACIÓN
INTERLOCUTORIO	No. 300

Resuelve el Despacho la aprobación o improbación de los términos del acuerdo conciliatorio celebrado entre la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL -CASUR-** y **GUILLERMO ALFONSO ROSAS**, el día 23 de febrero de 2015 ante la Procuradora 58 Judicial I para asuntos Administrativos de Cali, quién remitió el estudio de su legalidad a los Juzgados Administrativos de Medellín en razón del último lugar de prestación de servicio del solicitante.

I. ANTECEDENTES

El señor **GUILLERMO ALFONSO ROSAS**, actuando por conducto de apoderado judicial constituido para el efecto, presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Procurador Delegado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con el propósito de convocar al Señor Brigadier General (retirado) JORGE ALIRIO LEGUIZAMO, Director General de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL- CASUR** , o quien haga sus veces a audiencia de conciliación prejudicial y llegar a un arreglo formal con la entidad, con unas pretensiones económicas son de aproximadamente dieciocho millones de pesos mcte (\$18.000.000,00).

De conformidad con el poder especial presentado ante la Procuraduría, la finalidad de convocar a la entidad, se especifica, con el propósito de que efectuó el pago de las obligaciones respecto de la reliquidación de la asignación de retiro con los valores de los porcentajes del IPC adecuados, teniendo en cuenta que durante los

años 1997 a 2004 se incremento el sueldo básico del grado por debajo del índice de precios al consumidor consolidado por el DANE y en consecuencia a la asignación de retiro, contraviniendo los mandatos constitucionales de la movilidad del salarios y la conservación del poder adquisitivo en la asignación de retiro, lo mismo que lo preceptuado en la Ley 238 de 1995, en la procura de la defensa de mis derechos y garantías fundamentales.

Al respecto, solicitó designación de agencia especial nombrándose un procurador judicial de la ciudad de Cali, porque si bien el poderdante presto su servicio en la Policía Nacional y se pensiono en Medellín, desde que se pensionó reside con su familia en la ciudad de Cali.

Fundamenta su petición en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Se presento derecho de petición ante la entidad de las Fuerzas Militares, con la finalidad de que se reconociera:

1. La aplicación del reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones con fundamento en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado pro el DANE, para el periodo entre los años de 1997 y 2004.
2. La aplicación del reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones a partir del primero de enero de 2005, con el principio de oscilación, tomando como base de liquidación, el producto obtenido del reajuste por efectos del IPC, por el periodo comprendido entre los años de 1997 y 2004.
3. La actualización y liquidación del valor a cancelar por concepto de asignaciones de retiro y mesadas pensionales pendientes por pagar, aplicando la figura de la prescripción extintiva que es de cuatro (4) años, con fundamento en el Decreto 1211 de 1990.
4. La indexación conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
5. Para todos los efectos de la presente petición se deberá tener en cuenta los aumentos legales anuales decretados por el gobierno nacional, los índices de precios al consumidor desde 1997 hasta la fecha, la carta constitucional, el parágrafo 4 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 adicionado por el Ley 238 de 1995 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional

La entidad dio respuesta mediante Oficio No. 10453 del 25 de abril de 2014 Consecutivo No. 16330 de 2014, negando la petición e indicando que se acudiera a la Conciliación Prejudicial, a efectos de reconocer los puntos de la solicitud.

El día 02 de julio de 2014 **GUILLERMO ALFONSO ROSAS**, por conducto de apoderado judicial, radico solicitud de conciliación prejudicial.

II. ACUERDO CONCILIATORIO

Presentada la solicitud de conciliación, se logró un acuerdo conciliatorio en la Audiencia surtida el día 23 de febrero de 2015 (folio 34), con las siguientes manifestaciones, por la apoderada de la parte convocada:

“Como apoderado de la entidad convocada manifiesto que el comité de conciliación mediante acta 01 del 15 de enero 2015 mediante la cual la entidad ratifica la política institucional de conciliar el reajuste de la asignaciones mensuales de retiro por concepto de IPCE para los años 1997 a 2004, teniendo en cuenta los años más favorables para los convocantes, siempre y cuando se hayan retirado antes del 31 de diciembre de 2004, aplicando la respectiva prescripción de las mesadas no reclamadas en oportunidad, la entidad propone pagar el 100% del capital y el 75% de la indexación. La suma resultante de esta operación será cancelada dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación del acuerdo conciliatorio por el Juez contencioso administrativo competente y una vez radicada los documentos para su cobro en la entidad. Para este caso la propuesta se discrimina así: Capital se reconoce en un 100% y asciende a la suma de \$6.966.040, INDEXACIÓN, será cancelada en un porcentaje del 75% equivalente a \$ 359.905; para un total de \$7.325.945, menos descuentos de Ley por CASUR \$280.046, Y SANIDAD \$ 255.156 para un pago total de \$6.790.743, el pago se realizará dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud de pago una vez sea aprobado por Juez Administrativo de reparto esta conciliación... Los intereses no habrá lugar dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación judicial de esta conciliación; la fecha de inicio de pago es 07-03-2010 y la final 23-02-2015, el incremento mensual de su asignación de retiro será por valor de \$106.733. Se anexa CERTIFICACION SUSCRITA POR LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACION DE LA ENTIDAD MARTHA FABIOLA GUALTEROS ROCHA en 4 hojas 8 folios.]”

La propuesta anterior fue acogida por el apoderado de parte convocante, como consta en el acta de conciliación, al expresar:

“Acepto la propuesta, de manera integral, teniendo en cuenta que la fecha final de pago (sic), es todo”.

III. CONSIDERACIONES

1. De la procedencia de la conciliación prejudicial y criterios para su aprobación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos previstos por nuestra legislación, consistiendo, como lo pregona el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, el instrumento a través del cual, dos o más personas gestionan sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral denominado

conciliador. Luego, el elemento básico para que pueda entrar a actuar este medio de autocomposición es que haya posiciones encontradas entre dos o más personas, de donde emerge de modo irrefutable que en caso de que no hayan diferencias entre los extremos *solicitante y solicitado* la conciliación sale sobrando, como quiera que el propósito que se sirve con ella no es otro distinto al de ser fuente de arreglo de eventuales o existentes disputas.

Son conciliables los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación –*art. 19 de la Ley 640 de 2001-*, al igual que todos los demás que determine la ley –*art. 65 de la Ley 446 de 1998-*. Y desde el punto de vista de sus efectos, se ha dispuesto que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y que el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

Ahora bien, capítulo aparte en la Ley 23 de 1991, en la Ley 446 de 1998 y en la Ley 640 de 2001, merece el tema de la conciliación en materia contencioso administrativa, habiéndose previsto que pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas tanto prejudicial como judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre *conflictos de carácter particular y contenido económico* de los que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractuales, con la única salvedad en cuanto concierne al primer orden de acciones antes mencionadas en tanto no es posible, por mediar prohibición expresa, conciliar en asuntos de carácter tributario. Y obsérvese bien, que en todo caso, en la base de la conciliación subyace, como substrato absolutamente indispensable, un conflicto real y existente, que no habiéndolo o siendo el mismo fingido o aparente, la conciliación que se active es espuria e insano el eventual arreglo al que se llegue.

No se olvide que la conciliación contencioso administrativa es siempre en derecho, como lo indica el artículo 3° de la Ley 640 de 2001, pues se realiza ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias, lo cual debe llamar la atención con reforzada intensidad al respeto que se debe, en estos casos de manera muy especial, al principio de legalidad, como quiera que el juez administrativo es el guardián de la legalidad administrativa.

En atención a lo estatuido en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 640 de 2001, podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, a través de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del CPACA.

El artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, también contempló la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa en las demandas en que se formulen pretensiones relativas a nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Así mismo, se estableció la posibilidad de conciliar judicialmente las pretensiones una vez instaurado el proceso ordinario en ejercicio de los medios de control señalados en los artículos 138, 140 y 141 de dicha regulación, conforme se puede observar en el numeral 8 del artículo 180 ibídem.

Con relación a los supuestos para la aprobación de los acuerdos conciliatorios, se ha referido el Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 26 de Marzo de 2009, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. No. 2007-00014-01(34233), al exponer:

“El artículo 70 de la Ley 446 de 1998 -que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991-, dispone que las personas jurídicas de derecho público podrán conciliar, total o parcialmente, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, en las etapas prejudicial o judicial, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código Contencioso Administrativo; también se podrá conciliar en los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando en éstos se hubieren formulado excepciones de mérito.

“Por su parte, el artículo 73 ibídem –que le añadió el artículo 65A a la Ley 23 de 1991-, establece que la autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público, teniendo en cuenta así mismo, que conforme a lo dispuesto por el párrafo 2º del artículo 81 de la Ley 446 –modificadorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991-, no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado; de acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:

- 1) *Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.*
- 2) *Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.*
- 3) *Que la acción no haya caducado.*
- 4) *Que se hayan presentado las pruebas necesarias para soportar la conciliación, es decir, que respalden lo reconocido patrimonialmente en el acuerdo.*
- 5) *Que el acuerdo no sea violatorio de la ley*
- 6) *Que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público.*

2. Del caso concreto

En el asunto objeto de revisión, el Despacho considera que se cumplen los presupuestos señalados para la aprobación del acuerdo conciliatorio, a saber:

a) La debida representación de las partes

Se observa que el acuerdo conciliatorio fue suscrito por el apoderado de la parte demandante, quien, según poder conferido, cuenta con amplias facultades para conciliar, recibir, sustituir, desistir, reasumir y en general todas las facultades inherentes para el fiel cumplimiento de su mandato, sin impedimentos legales y amparado en las normas legales vigentes (fl.6).

Así mismo, no se discute que la entidad demandada se encuentra debidamente representada, en tanto quien suscribió el acta de conciliación fue el apoderado judicial, debidamente constituido para el efecto por el representante legal de ésta, Señor Brigadier General (r) JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN, Director General de CASUR (fl. 21). Se advierte que el apoderado judicial cuenta con la facultad expresa para conciliar y el acuerdo al cual se llegó en el presente asunto, no es otro que el autorizado por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, tal como obra en la certificación obrante a folios 24 a 27 del expediente.

b) Respetto de la materia sobre la cual versó el acuerdo

Previamente es pertinente aclarar que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia del 14 de junio de 2012, Consejero Ponente, Dr. Gerardo Arenas Monsalve, determinó que en el campo del derecho administrativo laboral, se estableció la facultad de conciliación únicamente sobre derechos inciertos y discutibles, así como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, cuando se logra un acuerdo conciliatorio que comprenda la totalidad del derecho en litigio, perfectamente pueda ser avalado o aprobado en sede judicial. En la misma providencia la alta Corporación indicó:

“... la audiencia de conciliación pueda versar sobre derechos laborales, solo que en este caso el alcance del acuerdo conciliatorio es limitado, pues el conciliador debe velar que no se menoscaben los derechos fundamentales.

“La jurisprudencia constitucional ha precisado que dicha limitación se refiere a que los derechos fundamentales no son objeto de transacción o desistimiento. En consecuencia, en principio no sería procedente recurrir a la conciliación, “sin embargo, también ha establecido la Corte que la convocatoria que hace el Juez de tutela a la audiencia de conciliación y la práctica de esta etapa procesal no son en sí mismas ilegales y por lo tanto no vician el trámite de la acción. Se hace necesario distinguir entre la conciliación como etapa procesal y el acuerdo conciliatorio”.

*“Así las cosas, siendo legal en si misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que: “Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se legare **a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental**” Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a “allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.”. (subrayado fuera del texto).*

“(...) de modo que el Juez si puede válidamente convocar a las partes a una audiencia de conciliación aun cuando el derecho este en discusión tenga el carácter de irrenunciable, o sea cierto e indiscutible cuando precisamente en esa audiencia se satisface y reconoce el derecho reclamado. En ese evento, “si las partes llegan a un acuerdo el Juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la Ley”, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 43 de la Ley 640 de 2001”¹

Adicionalmente, la Sección Segunda en la Sentencia del 02 de julio de 2013, reiteró la posibilidad de conciliar en materias de derecho administrativo laboral, precisando las condiciones de su procedencia, así:

“Ahora bien en el campo del derecho administrativo laboral, la Constitución Política establece la facultad de conciliación únicamente sobre derechos inciertos y discutibles, así como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales (arts. 48 y 53 de la CP).

“De lo anterior se concluye que la conciliación en derecho administrativo laboral puede versar sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter particular sujeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando:

“i) Se trate de derechos inciertos y discutibles.

“ii) Sean asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.

“iii) Se respete la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales.”².

Por lo anterior considera esta Agencia Judicial que en razón al desarrollo jurisprudencial expuesto anteriormente, es válida la celebración de la audiencia de conciliación en materia laboral, sólo cuando el acuerdo conciliatorio está limitado a que no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles y no se renuncie a los mínimos establecidos en las normas laborales y al derecho a la seguridad social, y se obtenga la satisfacción del derecho reclamado por el accionante.

Las partes afirmaron conciliar la reliquidación de la asignación de retiro, de conformidad con el IPC para los años 1997 a 2004; con el reconocimiento de

¹ Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia del 14 de junio de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-01016-01 (1037-11).

² Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 76001-23-31-000-2007-00053-02(1064-13) Actor: Edinson Medrano Romero. Demandado: E.S.E Antonio Nariño.

pago del 100% del capital correspondiente a la diferencia del incremento realizado a la asignación de retiro y del 75% de la indexación, y aplicando la prescripción cuatrienal, el cual se efectuaría en un plazo no mayor a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de radicación de los documentos requeridos por la entidad con la solicitud de pago.

En este sentido, el acuerdo se centró en asuntos de naturaleza puramente patrimonial, derechos que son plenamente disponibles por las partes.

c) El respaldo probatorio dentro del expediente es suficiente

Sobre el particular, obran los siguientes medios acreditativos:

- Oficio No. 10453/ OAJ del 25 de abril de 2014, mediante el cual se dio respuesta al derecho de petición (fl.9).
- Copia simple del Derecho de petición con fecha del día 26 de febrero de 2014 (fl. 10)
- Copia simple de la resolución No. 2435 del 19 de abril de 1999 mediante la cual CASUR reconoció la asignación mensual de retiro al convocante.
- Copia simple de liquidación de cesantía definitiva del día 10 de marzo de 1999 suscrita por al Jefe de la Unidad de Sustanciación de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional.
- Poder para actuar debidamente otorgado al apoderado de la parte convocada (fl. 21).
- Copia simple del Acta del Comité de Conciliación, No. 01 de enero 15 de 2015, contentiva de los parámetros para conciliar (folio 23-25).
- Liquidación del reajuste y la indexación de los salarios de GUILLERMO ALFONSO ROSAS emitida por CASUR (fl. 28-33).

d) No ser violatorio de la Ley

Respecto de la legalidad del acuerdo, es menester recordar que antes de la Constitución de 1991, en consonancia con el ordenamiento constitucional vigente para su momento, el Gobierno Nacional había expedido el Decreto Ley 1212 de 1990, por el cual se reformó el Estatuto del personal de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, el cual en su artículo 151, había establecido el principio de oscilación respecto de las asignaciones de retiro y las pensiones que se hubieran reconocido a los miembros retirados de la Policía Nacional, en los siguientes términos:

“Artículo 151. Oscilación de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. Los oficiales y suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a la norma que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.

Parágrafo. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de oficiales generales y coroneles, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el artículo 140 de este decreto.”

Tal medida garantizaría que las referidas prestaciones mantuvieran su poder adquisitivo, pues permitía que dichas prestaciones por lo menos recibieran el mismo incremento anual que el Gobierno Nacional hubiera dispuesto para el salario de los miembros activos de la policía y además impedía que los beneficiarios de tales prestaciones, pudieran acogerse a otras normas que regularan temas prestacionales en otros sectores de la administración, salvo disposición en contrario.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 estableció que *“El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas [...]”*, disposición declarada exequible en tanto establecía una diferenciación frente a las nuevas vinculaciones –Sentencia C-665 de 1996³- y, en razón de exceptuar a los miembros de estas entidades – Sentencia C-956 de 2001⁴-.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 238 de 1995 con la única finalidad de extender a los regímenes exceptuados, dentro de los cuales se encuentra la Fuerza Pública y la Policía Nacional, los beneficios del reajuste a la mesada pensional y la denominada mesada pensional adicional de mitad de año, establecidos en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993. Así, el artículo 1 de esta ley adicionó el parágrafo 4 al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que prescribe:

“Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.

Para el caso que nos convoca, el reajuste a la mesada pensional, debe recordarse que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 con el fin de conservar el poder

³ Corte Constitucional. M.P. Hernando Herrera Vergara

⁴ Corte Constitucional. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

adquisitivo de la mesada pensional estableció la obligación de reajustarla anualmente -el 1º de enero- y de oficio, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior⁵.

La Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”, contempló dentro de los elementos mínimos en el régimen de asignación de retiro, pensiones y reajustes, una disposición de contenido similar al principio de oscilación previsto en el artículo 110 del Decreto Ley 1213 de 1990.

En efecto, el numeral 3.13 del artículo 3 prescribe:

“Artículo 3º. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: [...]

“3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública *será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.*” (cursivas fuera del texto)

Esta ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004 que frente al incremento de las asignaciones de retiro y pensiones, reiteró en el artículo 42 el principio de oscilación, así:

“Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.

“El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.”

Este respaldo legal también ha sido reconocido por la Jurisprudencia del alto tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia del 6 de diciembre de 2007, con ponencia del Dr. Alejandro Maldonado Ordóñez y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, entre otras providencias, en las Sentencias proferidas

⁵ Artículo 14. Ley 100 de 1993. “Reajuste De Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. [...]”

el día 18 de junio de 2008 (M.P. Dra. Mercedes Judith Zuluaga Londoño)⁶, y el día 13 de agosto de 2008 (M.P. Dr. Gonzalo Zambrano Velandia)⁷.

Por tanto, se concluye que es viable reconocer el derecho de los miembros retirados de la Fuerza Pública o sus beneficiarios, al incremento de la asignación de retiro como de las pensiones conforme al índice de precios al consumidor, pero solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que una vez más estableció el principio de oscilación para el incremento de las asignaciones de retiro y pensiones. En todo caso, y de haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción, se dará aplicación al mismo, en los términos previstos en el artículo 155 del Decreto Ley 1212 de 1990.

Así, en el caso sometido a estudio, el acuerdo logrado entre las partes respeta la normatividad aplicable, en tanto se reconoció el reajuste conforme al IPC por los años 1997 a 2004, aplicando la prescripción cuatrienal sobre las mesadas no reclamadas de manera oportuna.

e) Respecto a la no afectación del patrimonio público

En relación con este aspecto el Consejo de Estado ha precisado que en el ámbito de lo contencioso administrativo, la conciliación por versar sobre aspectos que involucran el compromiso del patrimonio público tiene ciertas limitaciones orientadas a su protección y se circunscriben, básicamente a la existencia de soportes probatorios necesarios y suficientes del objeto de la conciliación.

“(...) la conciliación es un instituto de solución directa de los conflictos, constituida a partir de la capacidad dispositiva de las partes y cuya bondad como fórmula real de paz y como instrumento de descongestión de los despachos judiciales está suficientemente demostrada.

“En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la Ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que le es inherente, la Ley establece exigencias especiales que debe tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

“Entre dichas exigencias la Ley 446 de 1998, en el último inciso del artículo 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...)⁸”

⁶ Proceso con radicado N° 05001333300320070006401. Demandante: Raúl de Jesús T. Demandado: CASUR.

⁷ Proceso con radicado N° 05001233100020060171601. Demandante: Jesús Humberto Moreno Sánchez. Demandado: CREMIL

⁸ Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2004. C.P Alier Eduardo Hernández Enríquez, Exp. 850012331000200300091 01,

Teniendo en cuenta el material probatorio arrimado en el expediente y con base en lo anteriormente expuesto, que le otorga prevalencia al artículo 53 de la Constitución política relativo al principio de favorabilidad en materia laboral y acreditado además que el reajuste de la asignación de retiro que percibe el demandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 238 de 1995, resulta ser cuantitativamente superior al incremento que le fue reconocido por la entidad demandada al aplicar la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1212 de 1990, en concordancia con los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002, por medio de los cuales fijan los sueldos básicos para éste personal, el Despacho encuentra viable que se le reconozca al demandante el derecho al incremento de la asignación de retiro que percibe conforme al incremento del IPC.

Así las cosas, no se vislumbra una afectación al patrimonio público, pues además la conciliación fue TOTAL y con la misma, las partes contendientes le pusieron término a un eventual litigio sin que se mantenga ninguna situación pendiente de ser resuelta.

f) Respetto de la caducidad de la acción

De conformidad con el literal c) del numeral 1) artículo 164 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, prescribe que cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, puede ser presentada en cualquier tiempo.

El acuerdo que se revisa tiene como objeto la reliquidación y pago y la asignación de retiro devengada por el demandante conforme al IPC, para los años de 1997 a 2004, siendo esta prestación económica "*periódica*", no puede predicarse de ella la configuración de la caducidad, en virtud de la norma especial del artículo 164 ya referenciada.

En conclusión, acreditado que el acuerdo conciliatorio contenido en el acta del 10 de febrero de 2015, se encuentra debidamente respaldado en el acervo probatorio allegado al expediente y que no resulta lesivo para el patrimonio público, se procederá a impartir aprobación al mismo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio celebrado el día 23 de febrero de 2015, entre **GUILLERMO ALFONSO ROSAS**, quien actúa por conducto de apoderado y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR**.

SEGUNDO: En consecuencia, la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL- CASUR**, deberá reconocer y pagar a favor de **GUILLERMO ALFONSO ROSAS** el 100% del capital y el 75% de indexación. El valor total a pagar será la suma de \$6.790.743, valores que se le cancelarán dentro de los seis (6) meses siguientes a contados a partir de la solicitud de pago.

TERCERO: Se realizará un incremento mensual en su asignación de retiro por la suma de ciento seis mil setecientos treinta y tres pesos (\$106.733,00) a partir de la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: Una vez en firme la presente providencia, por medio de Secretaría, expídase copia auténtica con constancia de ser primera copia que presta merito ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Código General del Proceso, la cual será entregada al mandatario judicial de los demandantes o a quien éste faculte, previa presentación personal del escrito de autorización.

QUINTO: Notifíquese personalmente la presente providencia, al representante del Ministerio Público, esto es, al señor Procurador asignado a este Despacho.

SEXTO: En firme esta providencia, pase el expediente para su archivo.

NOTIFÍQUESE

JORGE HUMBERTO CALLE LÓPEZ
JUEZ

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTE (20°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO**

En la fecha se notificó por **ESTADO** el auto anterior.
Medellín, de _____ de 2015 fijado a las 8 a.m.

MIRYAM DUQUE BURITICÁ
SECRETARIA

**NOTIFICACIÓN PERSONAL
JUZGADO VEINTE (20°) ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**

Medellín, _____
COMPARECIÓ EL SEÑOR PROCURADOR JUDICIAL DELEGADO ANTE
ESTE DESPACHO QUIEN SE LE NOTIFICO PERSONALMENTE
EL CONTENIDO DEL AUTO ANTERIOR.

PROCURADOR JUDICIAL No 167

L.A.A.